

1989

Señor Director:

No obstante todos los malos augurios y las campañas desarrolladas por la oposición, la Constitución de 1980 entrará, dentro de poco, en su fase final. El llamado período de transición concluye indefectiblemente el 11 de marzo de 1989. Su culminación política está representada por el plebiscito presidencial, llamado a resolver la proyección o transformación del régimen. La ciudadanía debe tener perfectamente claras dos cosas: primero, que el plebiscito es el mejor instrumento para evitar un enfrentamiento político frontal, que se produciría, inevitablemente en una elección pluripersonal dominada por los partidos, y segundo, que este procedimiento es perfectamente democrático y fuente de indiscutible legitimidad. Prueba de lo que digo es la bendición que todos los países—incluido Estados Unidos—dieron al plebiscito que consagró en el poder a Corazón Aquino en Filipinas. No olvidemos que Marcos derrotó electoralmente a Aquino, pero que, por presiones que no es del caso mencionar, ésta fue instalada en el poder y luego su mandato ratificado por plebiscito. Lo que es bueno y democrático en Filipinas no tiene por qué ser malo y antidemocrático en Chile.

Lo concreto es que todas las estrategias

de la oposición han caído en el descrédito y en el olvido. La "movilización social", la "ingobernabilidad", la "desobediencia civil", la "resistencia pacífica", la "no violencia", etc. Igual suerte han corrido los "referentes". Uno tras otro han perecido en la contingencia sin dejar huellas, salvo una trágica secuela de víctimas y daños que hemos soportado con indignada resignación.

Al aproximarse 1989 hallamos una oposición fraccionada en cientos de grupos antagónicos, penetrada por influencias foráneas y financiada con recursos provenientes del extranjero. La situación nacional, de tiempo en tiempo, se analiza y comenta lejos de nuestras fronteras. Tutores todopoderosos se arrojan la facultad de decidir el destino de Chile. Estas actitudes merecen, en la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, un hondo malestar que se expresa en el desprecio que reciben quienes aparecen orientados por gobiernos, partidos u organismos extranjeros. A pretexto de la defensa de los derechos humanos se acepta toda suerte de intervenciones foráneas y, lo que es más grave, se cuestiona nuestra participación en la comunidad internacional. Es repugnante el doble standard que se nos aplica frente a países que, como Cuba o Nicaragua, hacen escarnio de las libertades públicas en nombre de los derechos del pueblo y de su autonomía política.

A la inversa, la estrategia del Gobierno se encamina a una apertura acelerada, la cual se refleja con nitidez en el ensanchamiento de la libertad de expresión (la que está llegando al bajísimo nivel de antaño), en el ejercicio pleno del derecho de asociación, en la estructuración del cuerpo electoral y en toda una institucionalidad creada, controlada y dirigida por la voluntad soberana del pueblo.

El Gobierno Militar, no obstante todas las dificultades con que ha tropezado, está reconstruyendo la democracia, conforme las reglas aprobadas al consagrarse la Constitución, dentro de los plazos previstos y conforme el itinerario previamente comprometido. Esto es lo concreto, lo inocultable y definitivo.

El Presidente Pinochet, por propia iniciativa, institucionalizó el régimen, fijó plazo a su mandato, propuso reglas claras para resolver sobre su sucesión y se empeña en cumplir y hacer cumplir la Carta plebiscitariamente aprobada. No merece, pues, el trato que le brinda la comunidad internacional, dominada por una campaña canallesca, financiada y dirigida por el marxismo-leninismo internacional.

En 1989 los chilenos deberemos resolver nuestro destino: proyectar el régimen, dándole un claro sentido democrático, o desandar el camino recorrido para volver a caer en la incertidumbre, la anarquía y la farándula politiquera. La alternativa es trascendental y la opción debe escogerse con plena conciencia de su significado e importancia.

Mientras los chilenos no vean en la oposición política una clara definición que ponga atajo a los excesos que sufrimos en el pasado, optarán, a mi juicio, por la continuidad del régimen. Esta decisión es patrimonio soberano de Chile y de su pueblo. De allí que reclamemos, cada vez con mayor énfasis, que saquen las manos de Chile quienes interfieren este proceso, abusando de su poder y su influencia.

Pablo Rodríguez Grez

Las cartas enviadas a esta sección deben estar escritas a máquina, tener como máximo dos carillas y consignar la individualización completa del remitente. El diario no puede verificar la identidad del autor y reproduce la indicada por éste. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar y titular las cartas, y determinar la prioridad que se asigna a su publicación. Por tanto, se sustraerá a cualquier debate con sus corresponsales sobre el ejercicio que haga de aquel derecho. No se devuelven las cartas que no son publicadas.